

# Hacer negocio con el Amazonas

Corporaciones españolas participan en  
negocios destructivos en la selva

# Índice

Un tesoro mundial amenazado por buscar beneficios a toda costa	3
Haciendo la vista gorda ante la devastación medioambiental	3
El aislamiento de las comunidades indígenas	3
El mito de la energía hidroeléctrica barata y limpia	4
Las grandes corporaciones deben dejar de hacer negocio con la destrucción del Amazonas	5
Iberdrola: echando balones fuera sobre su responsabilidad en Tapajós	5
Mapfre, la aseguradora española líder en “aseguramiento responsable”	60

# Grandes presas hidroeléctricas en la Amazonia: un negocio de Alto Riesgo

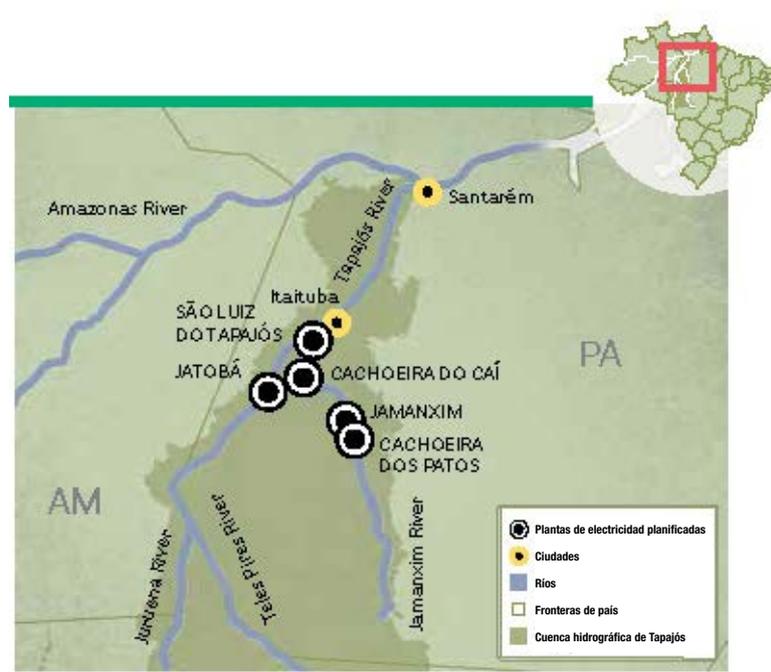
Este documento es un resumen del informe de Greenpeace Brasil *Damning the Amazon. The risky business of hydropower in the Amazon*, publicado el 13 de abril de 2016 y en el que se expone el impacto social y ambiental de los proyectos hidroeléctricos en la Amazonia, así como los riesgos financieros y de reputación a los que se enfrentan las grandes empresas que hasta la fecha se han vinculado a este negocio.

## Un tesoro mundial amenazado por buscar beneficios a toda costa

La región amazónica de Brasil, que incluye una de las mayores áreas de selva tropical que quedan en el mundo, está sufriendo un proceso de **destrucción por parte de múltiples intereses económicos**. Los principales agentes que están contribuyendo a esta destrucción son la agricultura industrial, la actividad ganadera, proyectos relacionados con la minería y las infraestructuras, como las presas hidroeléctricas, y la tala ilegal y sus subsiguientes asentamientos. Los más de 750.000 km<sup>2</sup> que ya han sido destruidos suponen un riesgo para la incomparable biodiversidad de la región, una gran amenaza para el mantenimiento de las comunidades tradicionales en sus tierras y para el equilibrio climático a nivel mundial.

A partir de 2004 el ritmo de deforestación se redujo, pero en 2012 el congreso brasileño aprobó una ley que generó un clima de impunidad en torno a la deforestación ilegal. Desde entonces la tasa de destrucción ha sufrido un vertiginoso incremento. Actualmente el gobierno de Dilma Rouseff, obsesionado con el desarrollo económico **a toda costa**, ha dado un paso más hacia la expansión masiva de la energía hidroeléctrica en el Amazonas.

Entre las áreas que se encuentran en mayor peligro está la **cuenca del río Tapajós**, uno de los mayores afluentes del Amazonas y uno de los últimos que se conservan en estado salvaje. Esta cuenca está calificada como **una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo**. Más de 40 presas de mediano y gran tamaño están planeadas o bajo construcción en esta zona única, que también se ve amenazada el otro proyecto totalmente megalómano de construir un canal industrial para transportar soja desde Mato Grosso hasta el Océano Atlántico. Entre estos nuevos planes también se encuentra la **construcción de un complejo de cinco presas en el río Tapajós** y uno de sus afluentes, el Jamanxim. Entre todas estas megapresas destaca la **presa de Sao Luiz do Tapajós** (en adelante SLT), la de mayor envergadura, que **anegará una superficie de 400 km<sup>2</sup> de selva virgen y generará la deforestación de otros 2.200 km<sup>2</sup>**.



## Haciendo la vista gorda ante la devastación medioambiental

Como ya se ha comprobado con proyectos de energía hidroeléctrica en el pasado y en el presente, las presas pueden destruir áreas enteras de hábitats como el bosque aluvial, que depende de las inundaciones estacionales, y tienen efectos devastadores sobre las poblaciones de peces y reptiles acuáticos, así como sobre los ciclos de vida de tortugas, caimanes, nutrias y delfines de río. El impacto es de tal magnitud que sus consecuencias se pueden notar a cientos de kilómetros, río arriba y río abajo, y en algunos casos puede significar la extinción de algunas especies. Las nuevas carreteras y el resto de infraestructuras asociadas a la construcción de presas actúan a su vez como imán para nuevos pobladores e industrias nocivas como la minería y la agricultura a gran escala, lo que a la postre supone una mayor deforestación.

A través de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), llevada a cabo por un consorcio de empresas que presumiblemente optarían a la adjudicación del proyecto de la presa SLT, se identificaron más de **2.600 especies en el entorno, muchas de las cuales se encuentran en peligro de extinción**, así como **varias especies de aves y primates aparentemente desconocidos para la ciencia**, lo que da muestra de la enorme importancia de la zona en lo que a flora y fauna se refiere.

Sin embargo, según **un estudio independiente dirigido por Greenpeace en 2015 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizada por el gobierno**, esta evaluación incurría en numerosos errores, desde la insuficiencia de la muestra de los hábitats clave, hasta la inexistencia de un estudio de las zonas que se encuentran río abajo del lugar propuesto para la presa, pasando por la falta de análisis de los riesgos a los que se sometería a las especies registradas o el carácter deficiente de las medidas

propuestas para mitigar los impactos en fauna y flora. Dicho estudio de Greenpeace exige al IBAMA, la autoridad encargada de conceder las licencias, que rechace tanto el informe de EIA como el informe de síntesis. La realidad que se ha presentado a los organismos encargados de tomar decisiones, así como al público en general, está distorsionada ya que esconde muchos de los descubrimientos del EIA sobre especies raras y en peligro de extinción. Pese a esto, hasta la fecha el IBAMA ha hecho caso omiso a la petición.

Asimismo, el estudio subraya la necesidad de llevar a cabo una evaluación integral que incluya la totalidad de la cuenca sobre los impactos acumulativos de la presa y del resto de proyectos de canalización industrial propuestos en la zona, algo a lo que el gobierno se ha resistido de manera cínica a pesar de los requerimientos del Consejo Nacional de Medio Ambiente.

## El impacto sobre las comunidades indígenas

Además de los impactos medioambientales ocasionados por la presa SLT, a los que se sumarían los de otras dos presas proyectadas río arriba, **su construcción supondría la inundación de grandes áreas de tierra pertenecientes al pueblo indígena Munduruku** (incluidos lugares que ellos consideran sagrados) y a comunidades ribereñas históricas que han vivido en la zona desde el siglo XIX.

Es más, el sustento y la salud de dichas poblaciones se verán severamente afectadas por la pérdida de pesca, la reducción de la fertilidad de los terrenos inundables como resultado de la interrupción de la circulación de sedimentos y la pérdida de la calidad del agua. Según estudios llevados a cabo en otras presas de la cuenca del Tapajós y en la presa en proceso de construcción de Belo Monte en el río Xingu, existe una probable vinculación entre las muertes masivas de peces y los problemas de salud y el agua contaminada.

Como consecuencia de dichas presiones **los habitantes de las zonas cercanas a la presa SLT se verán obligados a migrar a poblaciones cercanas que presumiblemente recibirán el influjo de más migrantes en búsqueda de trabajo en la presa o de otro tipo de oportunidades.** Como ya se ha visto en casos como el de Belo Monte, la magnitud y velocidad de dichos movimientos migratorios posiblemente superarán la capacidad de las infraestructuras de las ciudades en cuestión, que verán su tejido social destruido a causa del acusado incremento de consumo de drogas, violencia y prostitución, condenando así tanto a los residentes como a los nuevos habitantes a un futuro de precariedad.

**El Estado brasileño está obligado** tanto por la Constitución Federal como por acuerdos internacionales tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas **a consultar a los pueblos indígenas sobre cuestiones que les afecten y a garantizar su derecho a conceder o negar su Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sobre actividades que afecten a su territorio**, sustento o derechos. También debe salvaguardar sus derechos inalienables a sus territorios históricos y a sus recursos y cuenta con el deber constitucional de delimitar las tierras indígenas, de modo que se otorgue un reconocimiento legal formal. Sería de esperar que ante la propuesta de un proyecto que amenaza con privar a la población indígena de sus tierras y su sustento, lo mínimo que debería hacer el Estado es asegurarse de que se les consulte debidamente y que tengan la oportunidad de dar su opinión sobre el proyecto.

Sin embargo, cuando se trata de proyectos de energía hidroeléctrica el gobierno brasileño no ha mostrado tener mucho tiempo para semejantes sutilezas. Cuando en noviembre de 2014 la fiscalía ganó la demanda legal a través de la cual obligaba al gobierno a realizar un proceso de consulta sobre la presa SLT, el Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República declaró públicamente que la consulta no supondría variación alguna en la intención del gobierno de seguir adelante con el proyecto. En cualquier caso, **el carácter deficiente de la información disponible acerca de los posibles impactos de la presa, junto con el clima de miedo generado por el empleo de la Policía Federal y la Guardia Nacional para intimidar a los indígenas que se oponían a la construcción de presas en la región, habrían imposibilitado la realización de una consulta ajustada a derecho.** De hecho, todavía **no se ha llevado a cabo ninguna consulta** y es muy probable que el contrato de la presa sea concedido sin el CLPI de la comunidad Mundurukú, lo que violaría así sus derechos sobre sus territorios ancestrales, cuya delimitación ha sido obstruida por el gobierno de manera persistente con maniobras tales como el instrumento legal utilizado recientemente, que sólo debe utilizarse supuestamente bajo amenaza de la seguridad nacional.

## El mito de la energía hidroeléctrica barata y limpia

Los entusiastas del desarrollismo en la Amazonia intentan justificar semejantes impactos medioambientales y sociales afirmando que las presas de energía hidroeléctrica



constituyen una fuente de energía libre de emisiones de carbono que contribuirá a salvar al mundo del cambio climático. Desafortunadamente, dichas afirmaciones no se sostienen tras un pequeño análisis. Aparte de la energía liberada en la construcción de una instalación industrial de tal calibre en un lugar remoto, **las presas emiten una cantidad considerable de gases de efecto invernadero** (tanto dióxido de carbono como metano, este último mucho más potente) como resultado de la descomposición de la vegetación y la tierra inundada. Son raras las ocasiones en que la normativa establece que se elimine la vegetación y, en cualquier caso la descomposición de la tierra supone como mínimo las tres cuartas partes de las emisiones. Aunque no se presume que la presa SLT esté entre las presas con mayores niveles de emisión de gases (algunas de ellas pueden estar en niveles comparables a los de los combustibles fósiles), existen estudios a veinte años (la escala temporal durante la cual las medidas a tomar serán cruciales para impedir el peligroso cambio climático) que sugieren que su contribución al calentamiento global podría ser equivalente a la mitad de la atribuida a una central eléctrica de gas y estaría muy por encima del equivalente a una instalación eólica o solar.

Independientemente de que las presas del Amazonas no ofrezcan una solución energética limpia, tampoco está para nada claro que constituyan la solución viable o necesaria para la demanda de seguridad energética del país. **Como consecuencia del cambio climático, se prevé que los ríos de la región sufran drásticas reducciones en su caudal** (hasta un 30% en las inmediaciones de la localización de la presa SLT), **dificultando enormemente que las presas alcancen niveles de producción energética anual cercanos a los estimados según su diseño**. También se estima que las variaciones estacionales de caudal se incrementen, lo que supondría una reducción drástica de la producción durante buena parte del año. **Brasil ya se enfrentó a importantes racionamientos de electricidad en 2001 como resultado de la sequía, de modo que ¿por qué un país cuya energía se encuentra ya comprometida por su dependencia excesiva de la energía hidroeléctrica pretende incrementar aún más dicho nivel de dependencia?**

Esta incertidumbre, junto con los más que probables y **significativos sobrecostes en la construcción (por los cuales las presas del Amazonas son ya famosas)**, también debilitan el criterio económico como factor para la

inversión en energía hidroeléctrica en el Amazonas, pues **es muy poco probable que los proyectos alcancen la rentabilidad financiera**, a pesar de la ley aprobada en 2015 en un intento por socorrer a la industria de los problemas relacionados con la sequía por medio de una subida de precios para el consumidor y un mecanismo de cobertura centralizado. En cualquier caso, ciertos sectores señalan que el objetivo del gobierno de aumentar la capacidad del parque generador en 73 gigavatios para 2024 (un tercio de los cuales serían energía hidroeléctrica a gran escala) se basa en una proyección sobreestimada de la demanda que prevé un crecimiento económico desorbitado y que tiene más que ver con el deseo de expansión masiva de la industria pesada que con la intención de “alumbrar al país”. Según una estimación, hasta un 40% de la nueva capacidad energética proyectada sería innecesaria si se hicieran algunos esfuerzos orientados a la eficiencia energética.

## Las grandes corporaciones deben dejar de hacer negocio con la destrucción del Amazonas

A pesar de las numerosas cuestiones que se desprenden de la construcción de la presa, el proyecto SLT ya ha llamado la atención de varias empresas energéticas brasileñas y extranjeras (incluidas algunas de las más conocidas, como EDF y ENGIE), que han formado dos consorcios para llevar a cabo estudios preliminares del proyecto y se presupone que optarán a la concesión del contrato.

Es muy probable que algunas de las compañías de ingeniería global con amplia experiencia en energía hidroeléctrica en el Amazonas como General Electric, Vooith Hydro, Siemens y Andritz, así como las aseguradoras ya implicadas en el sector como Munich Re, Allianz y **Mapfre, también se involucren en el proyecto**. La financiación probablemente vendrá del Banco de Desarrollo Nacional, el BNDES, que ya colabora con bancos de desarrollo en China, Alemania y Japón, entre otros.

Sin embargo, a pesar de la imagen de respetabilidad que acompaña a estas instituciones y grandes empresas de ámbito internacional, la carrera de Brasil hacia la energía hidroeléctrica en el Amazonas está destinada al fracaso, un proceso a través del cual perjudicarán a su pueblo para enriquecer a unos pocos.

Los bancos, aseguradoras, proveedores y contratistas que se impliquen en estos proyectos se enfrentan a graves riesgos financieros y de reputación.

Por todo lo anterior, **Greenpeace está exigiendo al gobierno brasileño que cancele sus planes para proyectos de energía hidroeléctrica en el Amazonas** como el de la presa SLT. Al mismo tiempo, estamos alentando a las empresas y bancos que estén pensando en implicarse en dichos proyectos que focalicen sus esfuerzos en ayudar a Brasil a desarrollar un futuro con una energía limpia que no destruya los recursos naturales y atropelle los derechos de los pueblos indígenas.

## Iberdrola: echando balones fuera sobre su responsabilidad en Tapajós

La primera energética española forma parte del problema de la Amazonia. **En Brasil, esta compañía participa del 39% de la empresa brasileña Neoenergía. Esta corporación ha estado implicada en la construcción de numerosos proyectos hidroeléctricos, incluyendo proyectos recientes como el de Teles Pires o el polémico de Belo Monte**. Neoenergía es ya la primera distribuidora de energía por número de clientes, cuenta con 12 centrales hidroeléctricas y aspira en los próximos años a controlar el 2,7% de la capacidad de generación eléctrica. Neoenergía forma parte del consorcio de empresas que han elaborado el Estudio de Evaluación Ambiental del proyecto de Sao Luiz do Tapajós.

Iberdrola ha estado participando desde 2002 en las reuniones y compromisos del Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre responsabilidad social y en su Código Ético y políticas corporativas afirman que “Iberdrola y sus empleados tienen el compromiso de respetar los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares en los que desarrollen su actividad”.

Durante la intervención de un **miembro de Greenpeace** invitado a la **Junta de Accionistas de 2016, celebrada en Bilbao el pasado 8 de abril de 2016, se solicitó al Presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, una declaración pública de desvinculación del proyecto hidroeléctrico de Sao Luiz do Tapajós** y de otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía que amenacen la selva y los pueblos indígenas. **La respuesta no pudo ser más decepcionante**. El Presidente contestó “esto es una sociedad participada; ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema, por tanto, son temas de los brasileños que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas y yo no puedo decir nada más”.



En esta misma Junta de Accionistas el Presidente de Iberdrola, comentó que “Iberdrola se prepara para lograr el 70% de sus beneficios fuera de los países del euro”. Pero la contestación a Greenpeace no aclara si esta estrategia de expansión se basaría en energías renovables o en megapresas de alto impacto ambiental y social como las que se proyectan en la Amazonia. Parece que el Código Ético y los principios de responsabilidad corporativa de Iberdrola no son de aplicación en Brasil.

## Mapfre, la aseguradora española líder en “aseguramiento responsable”

**BB-Mapfre es una empresa conjunta formada por la compañía española Mapfre y el Banco do Brasil,** entidad financiera cuya participación mayoritaria es del gobierno de Brasil. BB-Mapfre es líder en seguros no de vida, con el 15,5% del mercado brasileño.

Como en el caso de Iberdrola, **Mapfre ha estado involucrada en el polémico proyecto de Belo Monte.** BB-Mapfre obtuvo el contrato para asegurar el 30% del

riesgo de esta megapresa, pero reaseguró posteriormente la operación en otras compañías de seguros (fronting).

En 2004 la compañía se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre responsabilidad social, y Mapfre sostiene que apoya los Principios para la Inversión Responsable (PSI).

En relación a su posible implicación en el proyecto de Sao Luiz do Tapajós, durante **una reunión con responsables de Mapfre mantenida el 14 de marzo de 2016, la empresa contestó a Greenpeace que necesitan tiempo para analizar los riesgos asociados con el proyecto** y que la decisión final se tomará conjuntamente con su socio el Banco do Brasil.

Banco do Brasil es propiedad del gobierno de Brasil, quien ya ha expresado su intención de llevar a cabo este proyecto, pasando por alto requerimientos ambientales y sociales. Como en el caso de Iberdrola, la empresa Mapfre tendrá que elegir entre priorizar los beneficios económicos o el cumplimiento de sus múltiples políticas de responsabilidad social corporativa.

Greenpeace es una organización global independiente que realiza campañas para cambiar actitudes y conductas, para proteger y conservar el medioambiente y promover la paz.

Greenpeace España,  
San Bernardo, 107 1ª planta 28015 Madrid  
Para más información: [info.es@greenpeace.org](mailto:info.es@greenpeace.org)

GREENPEACE